

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL  
Manizales, cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021).**

**SENTENCIA DE TUTELA No.094**

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por el señor **CARLOS EMILIO SERNA GONZÁLEZ** actuando a través de apoderado, en contra de la **INSPECCIÓN QUINTA URBANA DE POLICÍA DE MANIZALES** y donde fueron vinculados el **JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE MANIZALES, LA OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES** y la señora **ANDREA VIVIANA GIL AGUDELO** por la presunta vulneración a su derecho fundamental al debido proceso.

**I. ANTECEDENTES**

Refiere el accionante que los señores Luz Marina, Juan de Dios, María Inés Serna y Alberto Serna González fueron demandados en proceso hipotecario por la señora Andrea Bibiana Gil Agudelo en el Juzgado 1º Civil Municipal de Manizales, en el que se pretendía el cobro de un crédito respaldado con el 75% del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 100-107042 ubicado en la carrera 20 #19-44 de esta ciudad.

Que para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal, el proceso fue enviado al Juzgado 2º Ejecución Civil Municipal de Manizales el cual materializó el embargo, secuestró y finalmente remató el 75% del inmueble, adjudicándole dicha cuota parte a la ejecutante Andrea Bibiana Gil Agudelo, quedando el otro 25% en cabeza suya, y en el acta de entrega del año 2017, quedó consignado que se le hizo entrega del porcentaje del 75% a la señora Gil Agudelo.

Que la señora Gil Agudelo, a través de demanda reivindicatoria que se adelantó en el Juzgado 12 Civil Municipal de Manizales solicitó la entrega al señor Carlos Emilio Serna, de la cuota parte del bien, la cual le fue negada por sentencia del 21 de enero de 2021.

Aduce que la señora Gil Agudelo, a quien le pertenece el 75%, pretende le sea entregado el 100% del inmueble, a sabiendas que solo le pertenece un porcentaje, pues aspira a ocupar todo el inmueble a su antojo y voluntad, usurpando y desconociendo el 25% que le corresponde a él.

Manifiesta que la Inspectora Quinta Urbana de Policía de Manizales, fijó el día sábado 22 de mayo de 2021 en horas de la mañana el “Aviso” de ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE. Pero que el AVISO no es el que ordena el art. 308 CGP, además que en él se establece que es de *lanzamiento* a los ocupantes con uso de la fuerza pública y sobre el 100% del inmueble, ya que no especifica que lo sea sobre el 75% y que además que no fue posible

establecer en qué términos había ordenado la entrega el Juzgado Comitente, pues no ha tenido acceso al expediente.

Finaliza diciendo que según lo establecido en el art. 308 del CGP para la entrega de cuota parte debe el Inspector elaborar la COMUNICACIÓN del numeral 3º que dispone expresamente - *cuando la entrega verse sobre cuota en cosa singular- el juez advertirá a los demás comuneros que deben entenderse con el demandante para el ejercicio de los derechos que a todos corresponda sobre el bien-* y no materialmente o por LANZAMIENTO como se ha ordenado en el referido aviso, por lo que en su sentir, ejecutar un acto adicional no previsto en la norma es extra limitarse en sus funciones.

## II. PRETENSIONES

Solicitan entonces sea tutelado el derecho constitucional al debido proceso y que se ordene a la Inspección 5ª Urbana de Manizales que se abstenga de practicar la diligencia de LANZAMIENTO o ENTREGA para la que fuera comisionado por La Alcaldía de Manizales y está a su vez por el Juzgado 2º de Ejecución Civil Municipal de Manizales (según COMISORIO #034); que devuelva el comisorio solicitándole al juez certificar la vigencia de la orden de entrega y que se ordene que debe elaborar la COMUNICACIÓN del numeral 3º del artículo 308 del C.G.P.

De igual forma solicita se oficie se a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la conducta de la señora Andrea Bibiana Gil Agudelo al inducir a error al Juez y a la Inspección de Policía.

## III. PRUEBAS

Aportadas por la accionante: copia del proceso con radicado 2018-00799 del Juzgado 12 Civil Municipal de Manizales, Aviso de “lanzamiento” fijado por la Inspección 5ª Urbana de Policía de Manizales, Certificado de Tradición del bien inmueble identificado con matrícula 100-107042.

Aportadas por la señora **ANDREA BIBIANA GIL AGUDELO**: Con la contestación de la demanda no se anexaron otros documentos.

Aportada por la **INSPECCIÓN QUINTA URBANA DE POLICÍA**: Con la contestación de la demanda, presentaron registro fotográfico de fijación del aviso, copia del encargo a la inspección octava de policía, copia del Despacho Comisorio remitido por la Secretaría de Gobierno proveniente del Juzgado Segundo de Ejecución de esta ciudad.

Aportada por el **JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE MANIZALES**: Aportaron el proceso ejecutivo radicado con número 17001400300120150057900.

Aportada por la **OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES**: con la contestación a la acción de tutela, fue aportado previamente el proceso 17001400300120150057900.

#### IV. TRÁMITE

Mediante auto fechado 24 de mayo de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante, se decretaron pruebas de oficio y de igual forma dispuso la notificación a la entidad accionada y la vinculación del **JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE MANIZALES**, la **OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES** y a la señora **ANDREA VIVIANA GIL AGUDELO**, para que se sirvieran dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitaran las pruebas que pretendieran hacer valer para su defensa.

Así mismo se decretó la medida provisional solicitada por el accionante, la cual fue atendida por la **INSPECCIÓN QUINTA URBANA DE POLICÍA DE MANIZALES**, la cual suspendió la diligencia de entrega programada para el día 25 de mayo de 2021.

#### V. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.

La **INSPECCIÓN QUINTA DE POLICÍA DE MANIZALES** dio respuesta a la acción tuitiva, donde manifestó que es cierto que conoce del Despacho Comisorio enumerado 19-126, pues le fue asignado por reparto de la Secretaría de Gobierno a la Inspección Octava de Policía de la cual se encuentra encargada y que fue expedido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Manizales.

Refiere que no es cierto que el aviso se haya fijado el día 22 de mayo de 2021, pues se instaló el día viernes 21 de mayo en hora de la tarde y precisa que ese despacho procederá a realizar la entrega según lo preceptuado en los artículos 308 y 309, una vez se haya zanjado esta acción constitucional.

Adujo que lo indicado por la parte accionante no tiene fundamento, ya que la notificación se realizó de esa forma en tanto esa dependencia no conoce las direcciones de correo electrónico físicas de las partes en el proceso y que el accionante no hace parte del proceso a esa dependencia allegado ni hace parte del despacho comisorio.

Finaliza diciendo que no comparte una posible vulneración de derechos, en tanto el accionante no hace parte del proceso comisionado y que precisamente como no se conocen las direcciones de notificación de las partes involucradas, se procedió a realizar su notificación por el medio más expedito para informar de la diligencia que sería llevada a cabo a las personas interesadas, y que no se deduce de los artículo 308 y 309 del C.G.P una entrega simbólica como lo quiere hacer ver el accionante, por lo que esa dependencia se encuentra comisionada para realizar la entrega del bien inmueble sin aceptar oposición alguna, a la señora Andrea Bibiana gil Agudelo como rematante dentro del proceso ejecutivo hipotecario.

La señora **ANDREA BIBIANA GIL AGUDELO** manifestó que es cierto que se inició proceso ejecutivo con garantía hipotecaria, en donde se encontraba como garantía la hipoteca que recae sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 100-107042 y que dentro de la diligencia de remate del bien inmueble, se le adjudicó en

propiedad, el 75% del bien inmueble, el cual ya se encontraba embargado y secuestrado y que también es cierto que inicio un proceso reivindicatorio contra el ahora accionado.

Indica que si bien se realizó la adjudicación de la cuota parte a su favor, nunca se realizó por parte de la autoridad competente ni del secuestre, la diligencia de entrega del 75% del bien inmueble, precisando que nunca ha podido hacer uso o disfrutar de la propiedad que le fue adjudicada mediante providencia judicial, pues pese a intentar acercamientos extra oficiales con el señor CARLOS EMILIO SERNA GONZALEZ, nunca se le ha permitido disfrutar de la titularidad de su cuota parte, siendo este quien, durante todo el transcurso del tiempo, es el que lo ha disfrutado, utilizándolo, ocupándolo e incluso entregándolo a sus familiares para que habiten allí sin su autorización.

Aduce que no es cierto que pretenda inducir a error a ninguna autoridad vinculada, pues por el contrario, quien de mala fe se encuentra actuando y de forma temeraria, es el accionante, en tanto pretende solo con hechos y sin sustento alguno, desconocer la realidad jurídica que se puede evidenciar en el expediente del proceso que adelanta el juzgado segundo de ejecución civil de la ciudad, tanto así que este accedió a la solicitud de entrega, precisamente porque evidenció dentro del expediente la mora que tiene el despacho en llevar a cabo la diligencia de entrega.

Añade que nunca ha intentado vulnerar derecho alguno del accionante, por el contrario, se ha actuado de buena fe y siempre en instancias judiciales, tratando de hacer valer el derecho que le fue asignado en el proceso ejecutivo hipotecario y posteriormente ratificado a través del remate judicial y del que recuerda que el señor Carlos Emilio Serna, no es parte procesal dentro del expediente que adelanta el juzgado segundo de ejecución civil municipal.

Finalmente aduce que el accionante comete una imprecisión jurídica, toda vez que ni el artículo 308 del C.G.P, ni ninguna otra norma o reglamentación, precisan siquiera la existencia de una forma de entrega simbólica, pues de esto se colige que no tendría razón alguna este acto jurídico de entrega sino pudiera materializarse, pues no habría derecho o pedimento que perseguir ya que a instancias judiciales y de la cotidianidad todo quedaría de la misma manera como se encuentra. Por ello, refiere que lo que verdaderamente se establece en el numeral 3 del mencionado artículo es que el inmueble debe ser entregado materialmente al demandante y a los demás copropietarios y que posteriormente a la entrega, se deberán entender con este en cuanto a su derecho.

Por todo lo anterior, se opone a cada una de las pretensiones de la acción, en tanto manifiesta que lo que pretende el accionante y su apoderado de manera recurrente es dilatar un trámite que es legal y amparado en la norma.

El **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE EJECUCIÓN DE MANIZALES**, no dio una respuesta a la acción de tutela propiamente, empero envió el expediente en forma digital del proceso

con radicado 17001400300120150057900 por medio de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales.

La **OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES**, dio respuesta a la acción constitucional y relacionó las actuaciones que se han llevado a cabo al interior del proceso ejecutivo hipotecario.

Manifestó que dicha oficina no provee asuntos jurisdiccionales, en tanto solo son una oficina de apoyo encargada de realizar los oficios y demás comunicaciones ordenadas por los juzgados de ejecución.

Finalmente adujo que esa dependencia procedió a cumplir con los ordenamientos realizados en las referidas providencias, como consta en el expediente digital enviado al despacho el 25 de mayo de 2021.

## **VI. PROBLEMA JURÍDICO.**

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante cuando la **INSPECCIÓN QUINTA DE POLICÍA DE MANIZALES** fijó aviso para la entrega del bien inmueble donde habita y del cual es propietario de una cuota parte, con la anotación de “lanzamiento” en cumplimiento al despacho comisorio No. 19-126 expedido por el Juzgado Segundo Civil de Ejecución dentro del proceso ejecutivo hipotecario radicado 17001400300120150057900.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

## **VII. CONSIDERACIONES**

### **Subsidiariedad de la acción de tutela.**

La acción de tutela fue consagrada en la Constitución con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de las personas cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o por particulares para los casos que ha establecido la ley

No obstante, la solicitud de amparo no sustituye los medios ordinarios de defensa ante los jueces o autoridades administrativas por lo que goza de un carácter subsidiario y residual y así lo ha tratado la Corte en su sentencia T-369 de 2010, en la cual se indicó:

*“...3.1. La Constitución Política de Colombia en el artículo 86 prescribe sobre la tutela que: “[...] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de*

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así las cosas, esta acción es de carácter excepcional y subsidiaria, es decir, la acción de tutela sólo procede **cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial**. De tal suerte, que este mecanismo subsidiario no puede desplazar ni sustituir las vías judiciales ordinarias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado en abundante jurisprudencia que “cuando el juez de tutela deba decidir en relación con la vulneración o amenaza de un derecho fundamental habrá de verificar si existe o no otro medio de defensa judicial ante el cual pueda ventilarse el conflicto.”

Esta restricción a la procedibilidad de la tutela no resulta sin fundamento o simplemente caprichosa. En realidad, tiene el objetivo de salvaguardar las competencias atribuidas por la constitución y la ley a las diferentes autoridades judiciales. De esta forma, se garantizan la independencia judicial y uno de los fundamentos del debido proceso como la aplicación de los procedimientos legalmente establecido para cada caso.

...3.4. Ahora, la Corte también ha establecido algunas reglas en virtud de las cuales excepcionalmente puede proceder una acción de tutela a pesar de existir un mecanismo judicial alterno para la defensa del derecho en cuestión, cuando aquel “(i) o no resulta idóneo para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados, o (ii) la tutela es necesaria como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

La Corte Constitucional ha reiterado en múltiples oportunidades que únicamente procede el amparo constitucional cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial o, en el evento en el cual, a pesar de existir el medio de defensa, este no resulta idóneo para la protección del derecho y se hace necesaria la adopción de una medida transitoria que evite la ocurrencia de un daño irremediable. De manera expresa ha señalado que **“en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional...”**

De igual forma la Corte en sentencia de unificación SU-130 de 2013, frente a la subsidiariedad de la acción de tutela, expreso:

*“De acuerdo con su diseño constitucional (Art. 86), la acción de tutela ha sido considerada como un mecanismo de defensa judicial, de carácter subsidiario y residual, en virtud del cual, es posible, a través de un procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente determinados por la ley.*

3.2. El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.-A este respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro

*medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.*

*Bajo esa orientación, ha dicho la Corte que “la acción de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”.*

*3.3. Este elemento medular de la acción de tutela, la subsidiariedad, adquiere fundamento y se justifica, en la necesidad de preservar el orden regular de asignación de competencias a las distintas autoridades jurisdiccionales, con el objeto no solo de impedir su paulatina disgregación sino también de garantizar el principio de seguridad jurídica. Ello, sobre la base de que no es la acción de tutela el único mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales, pues existen otros instrumentos, ordinarios y especiales, dotados de la capacidad necesaria para de manera preferente, lograr su protección.*

***3.4. Así las cosas, los conflictos jurídicos en los que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, en principio, deben ser resueltos a través de los distintos medios ordinarios de defensa previstos en la ley para estos efectos, y solo ante la ausencia de dichos mecanismos o cuando los mismos no resulten idóneos o eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es procedente acudir de manera directa a la acción de amparo constitucional.***

*3.5. No obstante lo dicho, conviene precisar, que la idoneidad o eficacia de otras vías judiciales, debe ser analizada por el juez de tutela frente a la situación particular y concreta de quien invoca el amparo constitucional, como quiera que una interpretación restrictiva del texto superior conllevaría la vulneración de derechos fundamentales, si con el ejercicio de dichos mecanismos no se logra la protección efectiva de los derechos conculcados”*

## **Del debido Proceso**

El artículo 29 de la Carta Política de 1991 contempla una de las garantías fundamentales de más alta trascendencia en el Estado Social de Derecho pues establece los límites a que deben ceñirse las autoridades en su actuar frente a los administrados, se trata del derecho fundamental al debido proceso y está definido así:

*“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.  
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

*“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.*

*“Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un*

*debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.*

*“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.*

La violación al debido proceso se evidencia entonces cuando las autoridades incurren en conductas omisivas que le impiden al administrado el ejercicio legítimo de la defensa, pasan por alto etapas del trámite y otras situaciones que de una u otra forma trastocan un procedimiento con observancia de las formas para él establecidas en desmedro del administrado. En otro sentido cabe indicar que la acción de tutela es procedente para impugnar el contenido de una providencia judicial o un acto administrativo cuando se cumplen las condiciones generales de procedencia que son aquellas que permiten adentrarse en el contenido concreto de la providencia atacada a través de la acción y así verificar la existencia de alguna causal específica. Lo anterior fue expuesto en la sentencia C-590 de 2005 al concluir que los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son:

- a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, lo que obedece a que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tengan clara y marcada importancia constitucional, pues de lo contrario estaría involucrándose en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones, relevancia constitucional que se desprende de la afectación de los derechos fundamentales de las partes.
- b) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial tanto los ordinarios como los extraordinarios al alcance de la persona afectada, toda vez que de no hacer uso de todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico otorga para la defensa de sus derechos, no es viable acudir a la tutela pues no se puede permitir que se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislativo, y exige que los ciudadanos observen una actitud diligente en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
- c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, lo que implica que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración alegada, lo que se explica en la necesidad de no sacrificar la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
- d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de quien acciona.
- e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración, en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
- ) Que no se trate de sentencias de tutela, pues los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.



Ahora bien, si se cumplen los requisitos generales de procedencia, puede abrirse paso al estudio de las causales específicas de procedencia que establece el Tribunal Constitucional del país que pueden resumirse así:

1. Defecto orgánico, que surge cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
2. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
3. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
4. Defecto material o sustantivo, que se presenta en casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5. Error inducido, que ocurre cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de decisión que afecta derechos fundamentales.
6. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de la obligación de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de las decisiones judiciales por parte del funcionario que la profirió.
7. Desconocimiento del precedente, la cual se presenta en eventos como cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley que limita sustancialmente dicho alcance.
8. Violación directa de la Constitución.

De esta manera el papel del juez constitucional, cuando se trata de resolver acciones de tutela contra providencias judiciales o contra actuaciones administrativas debe valorar si la vía escogida por el accionante es la adecuada en cuanto a criterios de constitucionalidad, residualidad, inmediatez, necesidad, verificación y regulación jurisprudencial. Todos ellos constituyen los pasos previos antes de establecer si la tutela es apta para su estudio.

Para el máximo Tribunal la aprehensión de estos criterios deviene en la necesidad de armonizar la fundamentalidad de los derechos con la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, a fin de que con la aplicación de ésta no genere afectación de las prerrogativas inalienables de toda persona.

## I. CASO CONCRETO

La parte actora interpone este mecanismo sumarial, con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso, y se ordene a la **INSPECCIÓN QUINTA DE POLICÍA DE MANIZALES** abstenerse de practicar la diligencia de entrega para la que fue comisionado y que proceda a devolver el Despacho Comisorio al Juzgado Segundo Civil de Ejecución a fin de certificar la vigencia de la orden de entrega, así como ordenar que la entrega se realice de manera simbólica y no materialmente.

La acción de tutela fue admitida y notificada a la **INSPECCIÓN QUINTA DE POLICÍA**, quien se pronunciaron frente al mecanismo constitucional impetrado, en donde indicó que debe ser negada la presente acción tuitiva en tanto no existe vulneración de derechos por cuanto se está en cumplimiento de una comisión encargada por el Juzgado Segundo Civil de Ejecución de Manizales.

Así mismo fue notificada a los vinculados, el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE EJECUCIÓN DE MANIZALES**, la **OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES** y a la señora **ANDREA BIBIANA GIL AGUDELO**; esta última quien se pronunció frente a la acción constitucional, indicando que no se ha vulnerado ningún tipo de derechos al accionante, toda vez que, como propietaria del 75% del bien inmueble que le fue adjudicado por conducto de remate dentro del proceso ejecutivo hipotecario con radicado 17001400300120150057900, tiene derecho a que le realicen la entrega del mismo para su uso y disfrute.

## CONCLUSIÓN

Pese a que el ejercicio de la acción de tutela está delimitado por los principios de inmediatez e incluso de informalidad y trámite sumario, pues para acudir a ella, se exige un mínimo de requisitos que en todo caso son subsanables en protección del actor; lo cierto es que a ella no puede acudirse indiscriminadamente para ventilar cualquier circunstancia que contraría los intereses de quien cree vulnerados sus derechos fundamentales.

En efecto, la vocación de prosperidad de la acción de tutela se limita, entre otras, cuando, de los aspectos fácticos que se pongan en Conocimiento del Juez Constitucional o de los que de oficio logren probarse, pueda inferirse, aunque sea de manera mínima, que existe un derecho fundamental vulnerado, pues no cualquier acción u omisión de una autoridad o un particular, necesariamente trae como consecuencia la afectación de un derecho de carácter fundamental, pero además que se demuestre la inexistencia de otro mecanismo procesal para ventilar esas pretensiones o que los mecanismos existentes no sean eficaces.

Reiterando entonces que la procedencia de la acción de tutela se encuentra condicionada a la inexistencia de otro mecanismo de carácter legal que permita poner en conocimiento de la autoridad competente el asunto concreto.

Ahora bien, para el caso que ocupa el despacho, puede decirse que en principio al accionante le asisten otros medios de defensa judicial frente a la diligencia de entrega ahora debatida, como lo sería, la oposición a la entrega, el cual es el mecanismo idóneo establecido en la ley para ejercer el derecho de defensa en este tipo de diligencias y del cual debe decirse, no quedó probado dentro de estas diligencias que no lo fuera.

Por tanto, teniendo en cuenta que ante la existencia de otro medio de defensa judicial, solo procede la tutela de modo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a continuación el Despacho deberá analizar si nos encontramos frente a este, punto en el cual habrá de

decirse de entrada que no, toda vez que el accionante no argumentó ni logró probar que ante la realización de la diligencia de entrega se le pudiera generar un daño tal que ameritara la intervención del juez constitucional de forma urgente, no existiendo entonces un perjuicio irremediable o que el accionante se encuentre en peligro inminente de sufrirlo.

No obstante, dentro de las pruebas obrantes en el proceso, como lo son el Despacho Comisorio No. 19-126 y la respuesta emitida por la inspección quinta de policía, se desprende que la diligencia de entrega se realizaría sin permitir algún tipo de oposición, lo que a juicio de este despacho estaría violando el derecho al debido proceso del accionante.

Pues el despacho no ve razón alguna para la imposición de dicha negativa, más aún cuando en el auto del 24 de julio de 2019 proferido por el Juzgado Segundo Civil de Ejecución por medio del cual se da la orden de entrega del bien inmueble, no se hizo ningún tipo de prohibición a posibilidad de oposición; además de tener por sentado, como bien lo establecieron las partes en las respuestas emitidas en la presente acción constitucional, el accionante no hace parte del proceso ejecutivo hipotecario, siendo este un tercero al que no puede imponérsele de tajo la negativa de oponerse a dicha diligencia, pues como se dijo en precedencia no existe orden judicial que, aunque pueda darse en otros asuntos, le pueda negar la posibilidad de oposición.

Así las cosas y como quiera que este despacho si bien considera que el actor cuenta con otro mecanismo de defensa al cual acudir para lograr la protección de los derechos que considera violados y que son objetos de la presente acción constitucional; teniendo en cuenta la forma en que fue expedido el Despacho comisorio y que sería materializado por la accionada, esto es sin posibilidad de oposición alguna, se evidencia que en caso de realizarse de esta forma, se le violaría el derecho al debido proceso al señor **CARLOS EMILIO SERNA GONZÁLEZ**, razón por la cual teniendo en cuenta que dicha diligencia fue suspendida por orden de este despacho en cumplimiento a la medida previa decretada, se ordenará a la **OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES** que expida un nuevo Despacho Comisorio dentro del proceso radicado 17001400300120150057900 con observancia al auto de fecha 24 de julio de 2019 proferido por el Juzgado Segundo Civil de Ejecución, y a la **INSPECCIÓN QUINTA DE POLICÍA** para que programe nueva fecha para llevar a cabo la diligencia de entrega del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 100-107042 con observancia al nuevo Despacho Comisorio que se expida por parte de la OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES.

Ahora bien, este pronunciamiento no exime a la autoridad comisionada para que, en caso de oposición, analice con detenimiento tanto la calidad de quien la plantea y la forma en que lo hace, atendiendo a las normas que rigen este tipo de procedimientos, y en caso de considerarse que en efecto la oposición es válida, será la autoridad competente quien estudiara y determinará la prosperidad o no de la oposición.

Frente a la solicitud de oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la conducta de la señora Andrea Bibiana Gil Agudelo y la de compulsar copias al CSJ para que investigue al abogado que la asiste; de los hechos y pruebas no se observa ninguna situación que por parte del Despacho permita concluir que el mismo sea necesario; no

obstante, si el accionante lo considera puede acudir directamente ante dichas autoridades y pedir las investigaciones que correspondan y asumir un papel activo en las mismas.

Por último, se ordenará la desvinculación de la señora **ANDREA BIBIANA GIL AGUDELO** y del **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE EJECUCIÓN DE MANIZALES** por no ser estos los llamados a dar respuesta en el asunto.

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

### **RESUELVE**

**PRIMERO: TUTELAR** el derecho al debido proceso invocado por el señor **CARLOS EMILIO SERNA GONZÁLEZ** en contra de la **INSPECCIÓN QUINTA DE POLICÍA DE MANIZALES** y donde fue vinculada la señora **ANDREA BIBIANA GIL AGUDELO**, el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE EJECUCIÓN DE MANIZALES** y la **OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL DE MANIZALES**, por lo dicho en esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** a la **OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES** para que expida un nuevo Despacho Comisorio dentro del proceso radicado 17001400300120150057900 con observancia al auto de fecha 24 de julio de 2019 proferido por el Juzgado Segundo Civil de Ejecución, por lo expuesto en la parte motiva.

**TERCERO: ORDENAR** a la **INSPECCIÓN QUINTA DE POLICÍA DE MANIZALES** que programe nueva fecha para llevar a cabo la diligencia de entrega del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 100-107042 con observancia al nuevo Despacho Comisorio que se expida por parte de la **OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES**.

**CUARTO: DESVINCULAR** a la señora **ANDREA BIBIANA GIL AGUDELO** y el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE EJECUCIÓN DE MANIZALES** por lo dicho en precedencia.

**QUINTO: NOTIFICAR** esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

**SEXTO:** De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**VALENTINA SANZ MEJÍA**  
**JUEZ**

**Firmado Por:**

**VALENTINA SANZ MEJIA**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **984ac9a31e11eab7931ee726b601d7dcacfebb0be27e0cef64543e6a38a1fca3**

Documento generado en 04/06/2021 03:39:25 PM